

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
ENVIGADO ANTIOQUIA

CONSTANCIA SECRETARIAL:

En la fecha, se procede a remitir, a través del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Envigado, a los señores **JUECES CIVILES DEL CIRCUITO REPARTO DE ENVIGADO (REPARTO)**, el presente proceso, para que allí se surta el trámite al **RECURSO DE APELACIÓN** concedido en el **EFFECTO SUSPENSIVO**, frente al auto No. 4097 del 9 de diciembre de 2019 por medio del cual se terminó por **DESISTIMIENTO TÁCITO**, el presente proceso **EJECUTIVO SINGULAR**, instaurado por **BBVA COLOMBIA S.A.** en contra de **JORGE ALBERTO MEDINA RUIZ** asunto con número de Radicado 05266-40-03-003-2018-00342-00.

Consta de dos (2) cuádnos: Principal con 77 folios y de Medidas Cautelares con 22 folios.

Envigado, 10 de marzo de 2020.

CAROLINA USUGA GRANADA
Secretaria.

Lina Gao
10 MAR 20 19:37AM



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio de segunda instancia	022
Radicado	05266-40-03-003-2018-00342-01
Proceso	Ejecutivo
Demandante (s)	BBVA
Demandado (s)	Jorge Alberto Medina Ruiz
Asunto	El secuestro, en los procesos ejecutivos, no es una medida autónoma -La figura del Desistimiento Tácito no procede “mientras esté pendiente de consumir las medidas cautelares, pues en este caso es de suponer que si el demandante no ha diligenciado la notificación es porque persigue la efectividad de las medidas cautelares antes de que el demandado se entere del proceso”

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Diecisiete de marzo del año dos mil veinte

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en el proceso ejecutivo de **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.** contra **Jorge Alberto Medina Ruiz**, frente al auto dictado el 9 de diciembre de la anualidad pasada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Envigado, mediante el cual se declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Para proceder así, el *a quo* argumentó que “las razones que esgrime el procurador judicial de la parte ejecutante no son jurídicamente valederas para tener en cuenta la reposición de la decisión adoptada, la cual se estima fue acogida conforme a derecho, pues se avizora diáfananamente en el plenario que al momento de requerir a la parte, previa terminación por desistimiento tácito, no existían actuaciones pendientes encaminadas a consumir medidas cautelares previas, y mucho menos la manifestada por activa consistente en llevar a cabo la diligencia de secuestro del vehículo automotor de placas MOX-743, pues esta medida ni siquiera se había decretado, precisamente porque el actor no la había solicitado, y contrario a lo manifestado por el mandatario judicial, para el

sentir de esta agencia judicial, dicha cautela opera a ruego del litigante y no de manra oficiosa, pues téngase en cuenta que la misma disposición normativa del artículo 599 del C.G. del P., indica lo siguiente “Embargo y secuestro: Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes al ejecutado”, es decir, que atendiendo al poder dispositivo y facultativo del actor, es éste a quien la ley atribuye la posibilidad de solicitar las cautelas que estime pertinentes para que no resulte nugatoria la pretensión ejecutiva; además de resaltar que en el presente juicio , el secuestro resulta autónomo y complementario a la medida cautelar de embargo, y no como lo afirma el actor, esto es, que resulta menester el secuestro para el perfeccionamiento del embargo, pues téngase en cuenta que el objeto de la medida en este juicio hace relación a un vehículo automotor, y que el embargo quedó perfeccionado con la inscripción de la medida en el historial automotor... Adicionalmente, advierte que el único evento en que el secuestro perfeccionado el embargo, sería el contemplado en el numeral 3º del artículo 599 ibídem, que en el sub lite, no acontece”.

El apoderado judicial de la parte demandante, alegó que “en el proceso efectivamente estaba pendiente la notificación de la orden de pago, pero puede observar que hubo gestión de impulso del proceso, tendiente a notificarlo, que resultó infructuoso, pero a pesar que se pidió el emplazamiento, no se procedió a publicar edicto alguno porque faltaba un importante acto procesal para perfeccionar medida cautelar, el secuestro del vehículo de placa MOX 743”; manifiesta además que “está pendiente el perfeccionamiento de la medida cautelar, porque falta el secuestro del vehículo y por ende falta comisionar para el secuestro del automotor” y que “además si se emplazaba al demandado seguramente se garantiza el debido proceso, pero la mejor defensa es la que él pueda concurrir al despacho, si previamente se captura el automotor para el secuestro muy seguramente él había comparecido al despacho, con mejores posibilidades que con el emplazamiento”.

Por lo dicho, solicitó revocar la decisión y como consecuencia, se continúe con el trámite normal del proceso.

CONSIDERACIONES

La controversia sometida a estudio, se contrae a examinar si resultaba procedente la aplicación del desistimiento tácito, con fundamento en que el banco demandante no cumplió con la carga procesal requerida en providencia del 12 de septiembre de la anualidad pasada, esto es el emplazamiento del demandado de conformidad con el artículo 108 del Código General del Proceso.

Al respecto el artículo 317 *ibídem* indica que *“cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquier otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga proceso o de un acto de parte que haya formulado aquélla o promovido éstos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado”*; sin embargo en el inciso tercero del numeral 1º del mismo artículo, dice que *“el juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas”* (resaltado intencional).

En esa medida, entonces, la normativa transcrita riñe abiertamente con lo decidido por el *a quo*, pues si bien la entidad demandante no gestionó en el término que indica el artículo 317 *ib.*, el emplazamiento del demandado, lo cierto del caso es que hay una medida cautelar que no ha sido consumada, tal como se observa a folios 18 y siguientes del cuaderno # 2 de medidas previas.

En efecto, se evidencia que existe una solicitud del apoderado judicial del banco ejecutante, sin trámite alguno desde el 14 de julio de 2019, que conllevaría a que se concrete la medida cautelar decretada, que sería el secuestro del vehículo de placas MOX 743, esto conforme al requerimiento realizado por el juzgado de primera instancia, mediante auto del 5 de junio

del mismo año (folios 18, C. 2), donde se le indicó al demandante que “en caso de solicitarse el secuestro sobre el referido bien, deberá la parte actora informar dónde se encuentra rodando el automotor, para efectos de librar el respectivo Despacho comisorio que permita la práctica de la diligencia de secuestro, y allegarse al plenario el historial del vehículo... donde aparezca registrada la inscripción del embargo”.

En esa medida, entonces, mediante el memorial mencionado, el apoderado judicial de la entidad crediticia demandante, si bien no dijo expresamente que peticionaba el secuestro del automotor, como se requirió, sí informó en que ciudad rodaba y, junto con su solicitud, arrió el historial del bien donde consta la inscripción de la cautela, de lo que fácilmente podía deducirse que estaba solicitando el secuestro, máxime que en el caso -por tratarse de un proceso ejecutivo-, aquél **no constituye una medida autónoma**¹, sino -como lo ha considerado la doctrina:

“Constituye la tercera forma de ejecución del embargo, y la más complicada toda vez que se ha llegado a pensar en nuestro país que el secuestro constituye otra cautela, muy parecida pero diferenciable del embargo.

*El secuestro no constituye un proceso cautelar autónomo; es un momento de la cautela embargo, es decir, en los bienes sujetos a registro ésta es una segunda etapa de embargo y en los bienes no sujetos a dicho sistema, el embargo se realiza con el secuestro, esto es, los dos conceptos se fusionan y son una sola etapa del embargo”*²(negrilla intencional).

Si bien el togado no dijo expresamente que solicitaba el secuestro -vuelve y se insiste-, sí se infiere que implícitamente lo hizo, al haber cumplido con lo requerido para su decreto.

¹ García Sarmiento, Eduardo, Medidas Cautelares, Editorial Temis, 2005, pág.142.

² Quiroga Cubillos, Héctor Enrique. Procesos y Medidas Cautelares, Editorial Okey, 1991, pág. 173.

En el proceso jurisdiccional moderno no se pueden exigir palabras sacramentales para el ejercicio de los derechos consagrados en la ley sustancial.

Como bien lo resaltó la Corte Constitucional, en la sentencia SU 774 del 2014, “evitar el exceso de ritualismo y garantizar la efectividad del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, fueron dos objetivos reafirmados por el legislador al expedir el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 11 del CGP expresamente señaló que “al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. (...) El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”. Así mismo ambas normas señaladas, al igual que los antiguos Código de Procedimiento Civil y Código de lo Contencioso Administrativo, reconocen el deber del juez de acudir a sus potestades oficiosas para verificar las alegaciones de las partes y el esclarecimiento de la verdad”.

Es que según se deduce de lo argumentado por el *a quo*, él no decreta el secuestro del bien así se haya pedido anticipadamente, sino que lo hace -tratándose de bienes sometidos a registro-, una vez se allegue “*al plenario el historial del vehículo, expedido por la Secretaría de Movilidad de Medellín, donde aparezca registrada la inscripción del embargo*” (auto a folios 18 del cuaderno de medidas cautelares), práctica jurídica que no encuentra apoyo normativo, pues el embargo y secuestro de bienes se debe decretar simultáneamente, como una unidad; cosa diferente es que no se pueda realizar la diligencia de secuestro sino una vez exista prueba de la inscripción del embargo.

A lo anterior se suma, que se observa una desafortunada y exagerada aplicación del requerimiento de que trata el numeral 1º del art. 317 del C.G. del P., para efectos de decretar la figura del desistimiento tácito, pues

después del 5 de octubre del año 2018, fecha en que se libró el mandamiento de pago y se decretó la medida cautelar solicitada, el apoderado judicial de la parte demandante ha realizado múltiples actuaciones en el proceso, con lo que demuestra, que no ha abandonado el proceso y que ha estado atento a su impulso; simplemente que al resolverle el memorial que presentó el 2 de agosto del 2019 (folios 46), donde se solicitaba el emplazamiento del demandado, el juzgado del conocimiento accedió a ello, pero a renglón seguido requirió al actor para que en el término de treinta (30) días hiciera tal emplazamiento.

Esta instancia no considera que la figura procesal del Desistimiento Tácito se aplique en cada etapa procesal que requiera actuación de parte; no, ella tiene su razón de ser frente a un abandono prolongado, negligente de la actuación. Por esa razón, no se comparte la práctica –desafortunada por demás- realizada por algunos juzgados de requerir, desde el mismo auto admisorio de la demanda- a la parte demandante para que procure la notificación del demandado, so pena de la declaratoria de desistimiento tácito de la actuación.

En todo caso, el juez ni siquiera debió requerir al banco demandante para que procurara el emplazamiento del demandado, *“mientras [estaba] pendiente de consumir las medidas cautelares previas, pues en este caso es de suponer que si el demandante no ha diligenciado la notificación es porque persigue la efectividad de las medidas cautelares antes de que el demandado se entere del proceso”*³.

La conducta más razonable que debió desplegar el juez de primer grado, antes de declarar el desistimiento tácito, era reiterarle al banco demandante que debía pedir el secuestro, aun habiendo aportado aquél el certificado de

³ Rojas Gómez, Miguel Enrique. Código General del Proceso Comentado, 2012, pág. 366.

tradición del automotor e indicado el lugar donde circula, memorial frente al cual guardó absoluto silencio.

Así las cosas, se revocará el auto impugnado, lo que conlleva a que debe continuarse con el trámite normal del proceso, esto es darle trámite al memorial radicado el 14 de julio de la anualidad pasada (folio 19 del cuaderno 2).

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado

RESUELVE

Primero: Revocar el auto del 9 de diciembre de la anualidad pasada, proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Envigado.

Ssegundo: Sin costas en esta instancia.

Tercero: Ordenar la devolución del expediente al juzgado origen.

NOTIFÍQUESE

GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ

JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado
No. 044, fijado hoy en la Secretaría del
Juzgado a las 8 am

Envigado, ~~14~~ 16 de julio de 2019

TATIANA CORRALES RAMÍREZ
Secretaría